

PRISIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

EXPOSICION A. S. M.

El principio de libertad y el de orden no son hostiles a pesar de cuanto la exageración política haya supuesto en contrario; uno y otro se subordinan a las leyes imperecederas de lo justo y de lo bueno, de donde proceden; en vez de excluirse, se armonizan maravillosamente y se prestan recíproco auxilio. El orden bien entendido, destinado a la libertad el campo de sus manifestaciones y el uso conveniente de sus derechos, la libertad prudentemente establecida señala al orden la frontera que le separa de la arbitrariedad de la tiranía. Ni en lo que toca a las especulaciones, ni en lo relativo a los hechos donde aquellas se agitan, pueden ponerse en duda con razones sólidas estas máximas.

Por eso, a pesar de ciertas salvedades, las ingeniosas que persuasivas, han sido ocupadas en el fondo por todos los partidos, como lo acreditan con notable plenitud las disposiciones legales y gubernativas que se han adoptado en todas épocas sobre este grave asunto.

Sin recordar tiempos antiguos, sin ir a la memoria las leyes consignadas en el cuerpo juzgo, en las Partidas en las Ordenanzas y en otros cuerpos legales, severos por lo general contra los desórdenes y contra todos los vicios o abusos que pueden engendrarlos, basta recorrer ligeramente los preceptos legislativos de edades más cercanas, los que se contienen sobre resistencia a la justicia, denegación y mutación violenta de los títulos 10. y 11. del libro 12. de la Novísima Recopilación, para comprender, que los legisladores de todos los siglos han procurado con justo afán, sostener vigorosamente el orden público.

En la que podemos, relativamente, llamar época contemporánea ofrece pruebas abundantes y multiplicadas, de disposiciones nuevas importantes, la célebre ley de 17 de abril de 1821, sobre penalidad de los delitos de sedición y rebelión, y algunas otras, y la, de igual fecha marcando el rápido procedimiento, que en la instrucción de tales causas debia observarse; el Real decreto de 24 de mayo de 1824, los de 8 y 15 de enero y 20 de febrero de 1824, y la Real cédula de 19 de agosto de 1827, sobre la organización de la policía y el castigo de las sediciones; las Reales órdenes de 17 de noviembre de 1834, 6 y 8 de agosto de 1835; las órdenes de la Regencia de 23 de diciembre de 1841, 10 de 4 de junio y 21 de noviembre de 1842; la orden del Gobierno provisional de 15 de setiembre de 1843; las leyes de 11 de enero y 2 de abril, y las Reales órdenes de 14 y 19 de junio de 1845; las de 10 de mayo y 4 de noviembre de 1847; la de 15 de mayo de 1848, y el Código penal vigente del mismo año; las Reales órdenes de 5 de enero, 12 de marzo y 25 de junio de 1855, y la ley contra las personas y publicaciones

luna y por el Real de 3 de junio del propio año, los Reales órdenes de 19 de enero, 25 de junio, 26 de julio, y 9 de agosto de 1856; las de 7 y 9 de julio de 1861, y la reciente precursora, hoy de 8 de julio último, sobre suspensión de las garantías constitucionales: todas se originan en la idea fundamental de la conservación del orden, á pesar del derecho, espíritu político que preside á su formación, aunque en él bien claramente sus respectivas fechas que comprenden los períodos de una tiranía gloriosa, los que bien pueden calificarse de revolucionarios, y los del régimen constitucional en sus diversos matices y practicado por distintas y aun contrarias escuelas.

Sin embargo, siendo como ha sido vudouine la opinión acerca de la preferencia que el orden público merece entre cuantos objetos constituyen la práctica del Gobierno, es también verdad que carece nuestra patria de una ley general sobre la materia, de una ley que, tratando de apreciar este asunto bajo sus varios aspectos, satisfaga, hasta donde sea posible, las deseos de todos los partidos leales y las legítimas exigencias de los pueblos, y que á la par se concierte con los preceptos sagrados de la moral y de la justicia.

1. El Gobierno de V. M. se ha propuesto con firme insistencia llevar este rancio, y ha redactado la ley que tiene el honor de someter á vuestra Real aprobacion.

El primer que ha querido es fijar en tan delicado negocio la cuestión de método, el sistema que haya de servir de fundamento a la ley.

No, señores, que se han seguido más ó ménos exclusivamente; los mismos que se combaten desde los primeros orígenes de la civilización en el campo de la política: el sistema preventivo y el de la represión. Cualquiera de ellos adoptado de un modo absoluto, pudiera acarrear tristísimas desventuras, á pesar de la buena fe y de la recta intención con que lo aplicásemos en varias ocasiones, han querido aplicarlo sus respetivos mantenedores, es por lo tanto indispensable haber una combinación media que, evitando los peligros de ambos, ni sacrifique arbitrariamente la libertad por conservar el orden, ni por sostener aquella, entregue la sociedad á los azares de lo impudico y á los riesgos de la anarquía.

Bien se deja comprender que en la dilatada extensión que abraza el método conciliador que el Gobierno se ha propuesto seguir, la idea del orden impone su imperio, lo mismo á la Autoridad que manda que al súbdito que obedece, y este es uno de los principios más poderosos del presente proyecto de ley. Por él, comprenderá el ciudadano claramente la línea que limita sus acciones; y la Autoridad á su vez tendrá reglas fijas de conducta, así en lo común y ordinario, como para la recta aplicación de sus recursos discrecionales, y en circunstancias extraordinarias necesitase emplearlos.

Considerado el orden público en su acepción más alta, todo cuanto altera la armonía del conjunto moral ó materialmente, cae en rigor, bajo la jurisdicción científica de este trabajo. Dejando, no obstante, á los Códigos, y á otras varias leyes especiales, el carácter distintivo, la que ahora se propone se reduce á los actos meramente externos que pueden ser mirados como transgresiones legales ó reglamentarias, perturbadoras de la paz pública: que es la libertad de todos.

Partiendo de esta suposición legítima, en tres estados ha creído el Gobierno de V. Y. M., que puede encontrarse la sociedad relativamente al orden público; y á las diferencias que los separan deben ajustarse, los deberes, y las facultades de la Autoridad encargada inmediatamente de las funciones del Estado en esta parte.

El primero de ellos es el que puede definirse propiamente como estado normal y ordinario. El fin de la ley y de las funciones del Gobierno durante este pri-

ner periculo, consiste en mantener y conservar por la precisi6n y la vigilancia los m6ltiples intereses morales y materiales, cuyo conjunto y movimiento dan por resultado el hecho inestimable del 6rden exterior.

El Estado, por medio de una policia bien organizada, debe amparar aquellos intereses, facilitando la persecucion de los delitos, y dando proteccion a la sociedad con sus saludables ciudadanos. A este fin es preciso que la ley de orden publico le revista de todo el poder que es tan indispensable para el cumplimiento de su encargo dándole, no solamente las facultades deluidas que se juzguen necesarias, sino tambien en casos extremos y urgentes algunas discrecionales, limitadas por la prudencia y el buen sentido.

El estado que es asunto de la consideracion de esta ley es, segun lo lugar, el de agitacion y alarima. Cuando se llega á este momento, claro es que el orden público ha sido atacado, y que los sintomas de perturbacion principian á manifestarse.

La Autoridad debe moverse entonces con mayor amplitud; sus actos deben ser mas rápidos, vigorosos y eficaces que en el estado normal. Preciso es, con todo, evitar hasta donde sea posible el uso de la fuerza armada. Cuando las circunstancias lo reclamen, la Autoridad no debe sin embargo vacilar en aplicarla con prontitud y entereza.

Los funcionarios civiles son los que en esta situación tienen todavía á su cargo el restablecimiento de la paz común. Los Tribunales de justicia deben compartir con la Autoridad civil el honor del trabajo y del peligro en estas circunstancias, instruyendo rápidamente los procesos necesarios para comprobar los delitos é imponer á sus autores las penas que marcan las leyes.

El estado de sedición o rebelión abierta contra la Autoridad, es el tercero y último que por esta ley se reconoce. Cuando se llega á tan crítica situación ya todo cuanto tiene el carácter normal calla; no hay sino combatir la fuerza con la fuerza, y salvar á todo trance los intereses generales de las comunidades de sus enemigos.

La Autoridad militar con su imponente aparato, con sus medios sumarios y concluyentes, debe ser la encargada de sujetar a los rebeldes y de proteger a los ciudadanos pacíficos, declarando la población o distrito en estado de guerra, y sujetándolo por consiguiente a las condiciones propias de semejante régimen.

Tales son los principales fundamentos en que debe estribar, segun la opinion del Gobierno de V. M., la economia de la importante ley de orden publico. El problema ¿quién lo desconoce? es de suma dificultad. La urgencia de resolverlo imperiosa. El Ministro que suscribe ha discutido con sus colegas, tan talamente como lo ha sido dable hacerlo, así los principios como los pormenores de una ley de tanta trascendencia. Con la aprobacion de todos se ha compuesto al fin, si no tan perfecta como la puede imaginar el deseo, proponerla la teoria y aun hacerse en ocasion de mayor descanso y no tan cargada de apremios y de dificultades, mas extensa á lo menos y mas comprensiva que todas las que con este fin se han publicado hasta ahora. La aplicacion que de ella se procure y el tiempo descubrirán sin duda el camino y los medios de mejorarla. Entre tanto el Consejo de Ministros cree acudir á un mal de todos vivamente sentido, no deteniéndose en publicarla y establecer su rigor por Real decreto, y cargando de este modo con una responsabilidad mas sobre las muchas que sin vacilacion ha tomado sobre si en la dolorosa época de convulsiones y amenazas en que por dicha vivimos. Las Cortes examinarán este negocio y pronunciarán sobre él su fallo, que el Gobierno acogerá con la de-

ferencia que debe a los Representantes
de la Nación.

Por todas estas razones el Ministro que suscribe, de conformidad con los demás individuos del Consejo á que la Real confianza lo ha elevado, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 20 de marzo de 1867.—Señora
A. L. R. P. de V. M. Luis Gonzalez Bralio

REAL DECRETO.

De conformidad con lo que me ha propuesto el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Llegará como ley del reino el adjunto proyecto de ley sobre orden público hasta obtener la aprobación de las Cortes, a la que será presentado en la próxima legislatura.

Dado en Palacio á 20 de marzo de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, Luis Gonzalez Bravo.

Proyecto de ley de orden público.

TÍTULO PRIMERO

DE LOS ACIOS QUE SON OBJETO DE ESTA LEY

el orden público, además de lo que puede producir en otro concepto, toda manifestacion pública que ofenda á la Religión, á la moral, á la Monarquía, á la Constitución, á la dinastía reinante, á los Cuerpos Colegiados y al respeto debido á las leyes, ó que considerados en su lugar y las circunstancias en que se realice, produzca escándalo, agitacion, bullicio, tumulto, zozcona ó conato de motin, ó que pueda ocasionar relajacion de la disciplina del ejército.

Son propósitos frustrados ó tentativa las preparaciones de cualquiera de los delitos ó faltas expresados en el párrafo anterior, que teniendo algun grado de publicidad no lleguen á producir el resultado que se propongan.

Art. 2.º De los delitos y faltas enterarán los Tribunales de justicia para calificarlos, determinar las personas culpables y aplicar la correspondiente pena. Los propósitos frustrados y tentativas serán perseguidos y castigados por la Autoridad civil con arreglo á esta y á las demás leyes vigentes.

Art. 3.º Los delitos, faltas, propósitos frustrados y tentativas contra el orden público pueden cometerse en cualquiera de los tres estados, normal, de agitación y de guerra, que esta ley define; y cuando de su prevención, persecución o castigo la Autoridad a quien en cada uno de aquellos estados corresponda.

TÍTULO II.

DEL ESTADO NORMAL.
Art. 4.º Es obligación especial y ex

clusiva de la Autoridad civil en este estado conservar el orden público, restablecerlo cuando se altere, y castigar las infracciones que contra él se cometa dentro del alcance de sus atribuciones.

A este fin está facultada para prevenir los delitos y faltas, reprimir los propósitos y tentativas, y aprehender en su caso á quienes de esto sean culpados, sometiéndolos al Tribunal competente, ó penándolos por sí, segun proceda.

Tambien es de su obligacion evitar los actos que sin intencion de perturbar el orden, pueden ocasionar o preparar por cualquier concepto la alteracion de la paz en los recintos.

Art. 5.º Auxiliarán á la Autoridad civil en el desempeño de su encargo, los Tribunales ordinarios y las demás Autoridades administrativas que á la superior civil estén subordinadas.

Art. 6.º Los funcionarios especiales encargados de velar sobre el orden público, dependerán del Ministerio de Gobernación.

dos por las merced del Gobierno, auien-
tras no se pudiese pleuamente la uoluntad
del que en tal situacion fuese hallado.
Art. 4.º En dicho bando se instruya
a los rebeldes a depouner su hostilidad y
a prestar obediencia a la Autoridad legi-
tima. Los que lo hicieron en el termino
que el mismo bando señale, y si no lo
señalare en el de dos horas, quedaran
exentos de toda pena no siendo los auto-
res de la sedition o rebellion, ni relacio-
nados con este delito, pero seran solidi-
darios a una especial rigurosidad de la Auto-
ridad. Los municipales autores que au-

reciben en el capital de la guerra, como de la...
Art. 51. Las Autoridades civiles y militares...
Art. 52. La Autoridad militar...
Art. 53. La Autoridad civil...

Art. 54. La Autoridad civil...
Art. 55. La Autoridad militar...
Art. 56. La Autoridad civil...
Art. 57. La Autoridad militar...

Art. 58. La Autoridad civil...
Art. 59. La Autoridad militar...
Art. 60. La Autoridad civil...

Art. 61. La Autoridad civil...
Art. 62. La Autoridad militar...
Art. 63. La Autoridad civil...

Art. 64. La Autoridad civil...
Art. 65. La Autoridad militar...
Art. 66. La Autoridad civil...

Art. 67. La Autoridad civil...
Art. 68. La Autoridad militar...
Art. 69. La Autoridad civil...

Art. 70. La Autoridad civil...
Art. 71. La Autoridad militar...
Art. 72. La Autoridad civil...

Art. 73. La Autoridad civil...
Art. 74. La Autoridad militar...
Art. 75. La Autoridad civil...

Art. 76. La Autoridad civil...
Art. 77. La Autoridad militar...
Art. 78. La Autoridad civil...

esta la prueba que lo conviniera, y re-
nunciar a ella; expresando además si se
conformaba o no con todas las declara-
ciones de los testigos del sumario, o con
algunas de ellas, o si no lo era, y en
caso contrario, en qué punto.
Art. 87. Si las partes de consumo re-
nunciaren la prueba y se conformaren
con todas las declaraciones del sumario,
habrá el Juez por concluida la causa des-
de luego, y sin otro trámite mandará
traspasar los autos a la vista con citación
de las partes para sentencia.
En otro caso, recibirá la causa a prueba
debidamente calificada de tales cargos por un
acuerdo breve, que aunque se prorogue
no podrá exceder de 20 días, admitien-
do de las pruebas propuestas solamente
las que estime pertinentes y de notoria
influencia en el resultado del proceso.
Art. 88. Dentro de las 24 horas si-
guientes a la notificación del auto, reci-
biendo la causa a prueba, presentará ex-
traída por duplicado lista de los testi-
gos de cargo y de descargo de que intente
valerse para su prueba respectiva, expre-
sando la vecindad, estado, profesión, ofi-
cio o modo de vivir de cada uno de ellos.
Un ejemplar de estas listas se unirá a
los autos, y el otro se entregará a la par-
te contraria para la oposición de testigos
a los testigos que las tuvieren, o de-
claración de que no los tiene.
No se admitirán otros testigos que los
contenidos en dicha lista, y de ellos los
que se presenten y puedan ser examinados
dentro del término de prueba.
Tampoco podrán admitirse más de 15
testigos por cada pregunta útil.
Art. 89. El examen de los testigos de
cargo y de descargo, y la ratificación de los
del sumario con cuyas declaraciones no
se hubieren conformado las partes, ten-
drá lugar en audiencia pública con asis-
tencia del Promotor fiscal. También po-
drán asistir el procesado o su Procura-
dor y Letrado si lo conviniera.
A este fin, presentadas las listas de
testigos, el Juez señalará el día más
próximo posible para la comparecencia y
examen o ratificación de los mismos.
Los del sumario serán citados de ofi-
cio, como también los de cargo que pre-
sente el Promotor fiscal; los demás serán
presentados por la parte interesada; la
cual sin embargo podrá pedir que se
compela y apremie a los que rehusen el
comparecer a declarar.
Art. 90. Los testigos que no se ha-
llaren a más distancia que la de un día
de viaje de la residencia del Juez, se-
guo los medios de comunicación estables
citos, serán compelidos a comparecer
personalmente no mediando razones ju-
tas que lo impidan; y también cuando a
reclamación de alguna de las partes es-
timare el Juez indispensable para el car-
go o descargo la comparecencia personal.
Art. 91. Los demás testigos se exa-
minarán por medio de exhortos, diligen-
ciándose estos con la mayor urgencia
por los Jueces exhortados, bajo su mas es-
trecha responsabilidad.
Art. 92. En el día y hora señalados
al efecto, se procederá a la ratificación y
examen de los testigos, verificándolo de
cada uno de ellos con separación. Con-
cluida la declaración de cada testigo, las
partes o sus defensores podrán hacer al
animo por conducto del Juez las pregun-
tas que este admita como pertinentes,
extendiéndose así la pregunta como la
contestación. También se escribirán las
preguntas que el Juez desechel por in-
pertinentes a la parte interesada, du-
reclamare a fin de que la Superioridad
pueda apreciarlas en su día.
Art. 93. La prueba de tachas se hará
en su caso acto continuo de la principal,
formulando por escrito la parte intere-
sada las preguntas a cuyo tenor, de-
ben ser examinados los testigos que presen-
te para dicha prueba.
Art. 94. Concluido el término de prueba,
ó practicada toda la que hubieren
propuesto las partes, aunque aquel no
haya espirado, lo acreditará el Escriba-
no por diligencia, y sin otro trámite pa-
sará los autos al estudio del Juez para
sentencia, haciéndolo saber a las partes.

Art. 95. Dentro de los dos días si-
guientes al Juez hallare en la causa
defectos sustanciales que subsistiesen
algunos diligencias pendientes para
la calificación definitiva de la verdad,
declarará que para mejor proveer se
practiquen inmediatamente todas las que
fuesen indispensables bajo su responsa-
bilidad en el caso de dar con esto: thar-
gen a innecesarias dilaciones.
Art. 96. El Juez dictará su sentencia
que deberá ser fundada dentro de los
seis días siguientes al día que el Escriba-
no le hubiere pasado la causa a este fin.
En la propia sentencia mandará tam-
bien remitir los autos en consulta al
Tribunal superior, con citación y empla-
zamiento de las partes para que com-
parezcan ante él dentro de tres días si la
Audiencia residiese en la misma pobla-
ción, y dentro de seis en otro caso.
Art. 97. El emplazamiento se hará a
los Procuradores de los procesados y al
verificado el Escribano les prevendrá
que nombren Procurador y Abogado
que defendan a sus representados en el
Tribunal superior, bajo apercibimiento
de nombrarse de oficio, admitiéndoles
dicho nombramiento si lo hicieren en el
acto de la notificación.
Art. 98. Las causas contra reos au-
sentes se sustanciarán por los autos
trámites de los anteriores, pero
no se ratificarán otros testigos del sumario
que aquellos con cuyas declaraciones
no se hubieren conformado el Promotor
o los procesados presentes.
Art. 99. Los Jueces tendrán el tér-
mino de 24 horas para dictar las pro-
videncias interlocutorias.
Contra ellas no se admitirá otro re-
curso que el de reposición y apelación
subsidiario, interpuesto dentro de segun-
do día. La apelación solo se admitirá en
un efecto, y para sustanciarla se espera-
rá a que se remitan los autos a la Audiencia
en consulta de la sentencia definitiva.
Contra las providencias denegatorias
de prueba no se da recurso alguno; pero
la parte agraviada podrá formular ante el
inferior la oportuna protesta para repro-
ducir su petición en la segunda instancia.
Sección tercera.
DE LA SEGUNDA INSTANCIA.
Art. 100. Recibidos los autos en la
Audiencia, se pasarán sin dilación al Re-
lator para que forme el apuntamiento
en el término que la Sala le señale, aten-
diendo el volumen de los autos, pero sin
que pueda exceder de ocho días.
Art. 101. De los autos por el
Relator se comunicarán al Fiscal, y a
cada una de las partes para instrucción
por un breve término que no podrá ex-
ceder de seis días para cada una.
En el caso de ser mas de dos de
defensas, se practicará lo prevenido en el
art. 82.
Al propio tiempo se hará el nombra-
miento de Procurador y Abogado de ofi-
cio para los procesados que no lo hubie-
ren verificado por sí mismos.
Art. 102. Al devolver los autos ó
darse por instruida de ellos cada parte,
manifestará bajo la firma de su Letrado
y Procurador, su conformidad con el
apuntamiento, ó las omisiones ó inexacti-
tudes que a su juicio puedan haberse
cometido en él, pidiendo en este caso se
rectifiquen.
Art. 103. También podrán las partes
al devolver los autos ó darse por instrui-
das, pedir que se rectifique la causa a
prueba.
Este rectificación a prueba en la se-
gunda instancia solo podrá tener lugar
para justificar hechos nuevos de notoria
influencia en el resultado de la causa,
jurando no haber tenido conocimiento
de ellos en tiempo oportuno para alegar-
los y probarlos en la primera, y sobre los
hechos no admitidos por el Juez de pri-
mera instancia cuando se hubiere hecho
la protesta expresada en el art. 93.
Art. 104. La Sala designará un Mi-
nistro ponente, el cual informará sobre
la reforma ó adiciones del apuntamiento
y sobre la procedencia de la prueba que
se hubieren solicitado.
El mismo Ministro ponente ejercerá

las demás funciones propias de este cargo.
Art. 105. Si la Sala estimare proce-
dente la prueba propuesta, mandará
practicarla, recibiendo para ello la causa
a prueba por un breve término que
aunque se prorogue, no podrá exceder
de 20 días.
La prueba en este caso se practicará
con las mismas formalidades que en la
primera instancia ante el Ministro ponente,
ó dándose comisión al Juez inferior
del punto donde se hallen los testigos.
Art. 106. Conforme las partes con el
apuntamiento, ó hechos en él consignados
acordados, ó adicionados en su caso
con las pruebas practicadas en la segun-
da instancia, se señalará para la vista el
día más próximo posible, con citación de
las partes.
En el acto de la vista informarán de
palabra, primero el Fiscal, y después los
defensores de los procesados, por el mis-
mo orden que hubieren guardado en la
primera instancia. Caso de haber apela-
do alguna de las partes, su defensor va-
rá de la palabra antes que el Fiscal.
Art. 107. Estas causas se verán pre-
sentes por Magistrados, debiendo ser
uno de ellos el Regente, que haga
sus veces.
Si en la sala a que corresponde no hu-
biere número suficiente de Ministros, se
agregarán los mas antiguos de las otras
Salas, hasta completar, con exclusión
de los Presidentes, si hubiere número su-
ficiente para ello.
Art. 108. Concluida la vista, la Sala
dictará sentencia fundada dentro del
término de seis días.
Esta sentencia causará ejecutoria.
Art. 109. Dictada la sentencia, se re-
mitirá sin dilación certificación de ella al
Juez inferior, para su ejecución y cum-
plimiento, sin perjuicio de la tasación de
costas y gastos del juicio.
Hecha esta y aprobada, se devolverá
la causa al Juez inferior con la certifica-
ción correspondiente.
Art. 110. Contra las providencias
interlocutorias en las Audiencias de las
causas de que se trata no se admitirá
otro recurso que el de súplica, para ante
la misma Sala si se interpusiere dentro
de segundo día.
Art. 111. Los Jueces y Tribunales no
tendrán para estas causas horas determi-
nadas de despacho; utilizarán el día y la
noche por todo el tiempo que sea nece-
sario, según la urgencia del caso a juicio
de los mismos.
Art. 112. En todos los actos públi-
cos de estas causas se hará guardar el
orden mas riguroso, sin permitir a los
concurrentes demostraciones de ninguna
clase, empleándose para conservarlas, ade-
más de las correcciones disciplinarias
que procedan, la fuerza civil o militar
que el Juez ó Tribunal crea necesaria.
Tampoco se permitirá a los defensores
que abusen de su cargo en sus informes,
sosteniendo doctrinas reprobadas, ó
que puedan excitar los animos de los
concurrentes.
En tal caso el que preside el acto les
retirará la palabra si no se corrigiesen a
la primera advertencia, sin perjuicio de
lo demás que proceda.
Art. 113. Sobre los demás puntos res-
pectivos al procedimiento de estas cau-
sas ante la Autoridad judicial, que no se
hallen expresamente marcados en la pre-
sente ley, se observarán las reglas esta-
blecidas en los procedimientos comunes
y en la ley provisional para aplicación
del Código penal, sin que se acuda a
ninguna otra disposición especial ó
privilegiada.
Capítulo III.
**Del procedimiento ante la Autoridad mi-
litar en el estado de guerra.**
Art. 114. Una vez declarado el estado
de guerra, la jurisdicción militar será la única
competente para conocer de todas las
causas por los delitos de sedición, rebelión
y sus auxilios, y los demás comprendidos en
el tit. 3.º, lib. 2.º del Código penal. También
conocerá de las expresadas en el art. 55 de
esta ley si el Capitán general no previniere
otra cosa.
Art. 115. Todas las causas de que en
estos casos conoce la Autoridad militar,

cualquiera que sea el furto de los procesados,
serán juzgadas en los Consejos de Guerra
ordinarios, formados con Jefes y Oficiales de
todas las armas y con asistencia de Asesor
letrado según los Ordenamientos del ejército.
Art. 116. Para conseguir la mayor acti-
vidad en las causas que se formen con arre-
glo a Ordenanza, podrán delegar los Capita-
nes generales en el Jefe militar que crea
conveniente, si se formaren las causas fuera
del punto de su residencia, la facultad de
dictar y terminar el sumario, mandando se
eleve a prueba, y cuando este terminado
mandará pasarlo en Consejo de guerra, todo
con dictamen de Asesor, reservándose el Ca-
pitán general la aprobación de las sentencias
y la facultad de apelar, en los cuarteles li-
bremente, sin perjuicio de con un posesión de pe-
nas leves de acuerdo con el Auditor de Guerra.
Art. 117. Causarán ejecutoria con arreglo
a Ordenanza las sentencias que merezcan la
aprobación del Capitán general, de acuerdo
con el Auditor, y en caso de negarse la aproba-
ción, si de los autos constare que el Abol-
tado con este letrado, se remita la causa a
la resolución del Supremo Tribunal de Caer-
ra y Marina, que tendrá obligación de dictar
sentencia a los cuatro días de recibirla, el procesa-
do.
Art. 118. Las causas contra quienes se
sustanciarán, citándose y emplazándose por
tres edictos con término de tres días, cada
uno pasado los cuales se leerá la sentencia.
Art. 119. En los procesos militares por
delitos contra el orden público, se suplirán
los efectos que la Ordenanza exige en los ordi-
narios, practicándose aquellos solamente enan-
do se cumplieren los requisitos para el declara-
miento de la rebeldía. Tampoco se extenderán
las penas que no puedan afectar el resultado
de la causa.
Art. 120. Las ratificaciones se limitarán
a aquellos testigos cuyas declaraciones sean
de cargo o descargo a los acusados y se pre-
cintará de las restantes.
Art. 121. Se formarán piezas separadas
cuantas veces sea conveniente para la acti-
vidad del procedimiento contra algunos de los
acusados.
Art. 122. El Capitán general podrá re-
mitir a la jurisdicción competente aquellas
causas que haya comenzado a formar, y crea
no afecten al orden público, las causas de
falta, no solo en la sustanciación, sino en
las sentencias y apelaciones, según el curso
ordinario, separándose de todo procedimiento
militar. Los Jueces, sin embargo, estarán
obligados a dar cuenta del estado del proce-
dimiento cuando se lo reclamare el Capitán
general.
Art. 123. A los reos no militares se les
aplicarán por los Consejos de guerra las penas
que marca el Código penal; a los militares
las que marca en la Ordenanza del ejército.
Art. 124. En las sentencias de los Conse-
jos de guerra no se hará condenación de costas.
Capítulo IV.
**Del procedimiento gubernativo en materia
de faltas.**
Art. 125. A la Autoridad civil guberna-
tiva o municipal corresponde exclusivamente
el castigo de las faltas cometidas contra el
orden público en estado de paz.
Art. 126. Las penas imponibles por di-
cha Autoridad serán las establecidas por esta
ley relativamente a las faltas, capítulo 1.º del
título V de la misma.
Art. 127. En la imposición de estas penas
procederá la Autoridad civil, a su prudente
arbitrio breve y sumariamente, prestando
audiencia a los interesados de palabra o por
escrito, pero sin que puedan emplearse mas de
tres días en estas diligencias.
Art. 128. Contra los acuerdos de la Au-
toridad civil en la imposición de las penas
gubernativas que pueda aplican a las faltas,
conforme a esta ley, no se da otro recurso que
el de queja ante el superior gubernativo, ó el
de responsabilidad en su caso, según la pre-
vención del art. 19.
Art. 129. La interposición de estos re-
cursos no impedirá la ejecución de las penas,
que se harán desde luego efectivas.
Art. 130. Para la más exacta aplicación de esta
ley en los puntos y objetos que requieran
instrucciones especiales, podrá dictar el Go-
bierno los correspondientes reglamentos.
No comprende la ley de orden público
los delitos de guerra civil formalmente decla-
rada, ni los de guerra extranjera.
Art. 131. Quedan derogadas todas las leyes y
disposiciones gubernativas ó reglamentarias
dictadas hasta la fecha sobre orden público
en general, penalidad de los delitos ó faltas
que contra el mismo se cometan y procedi-
mientos para su castigo.
Madrid 20 de marzo de 1867.—Luis Gon-
zález Brabo. (Gaceta de 22 del actual.)
IMPRENTA DE D. FRANCISCO PAZ.

SUPLEMENTO

AL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ORENSE

del jueves 28 de Marzo de 1867, número 38.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NÚM. 84.

Subasta para la conduccion del correo diario desde esta Capital á Zamora.

Correos.—Negociado 2.º

Por el Ministerio de la Gobernacion se me comunica con fecha 16 del actual la Real orden siguiente:

«El Sr. Ministro de la Gobernacion dice con esta fecha al Director general de Correos lo que sigue:

«No habiendo tenido efecto la subasta para la conduccion del correo entre Zamora y Orense, la Reina (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por V. E., se ha dignado acordar que se anuncie una nueva licitacion, elevando el tipo á 30.000 escudos anuales y con arreglo á las demas condiciones del pliego adjunto.»

«De Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro, lo traslacio á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes, acompañando la copia del referido pliego.»

Lo que se inserta en este periódico oficial para su publicidad y conocimiento de las personas que deseen interesarse en la subasta de que se trata, la cual tendrá lugar en mi despacho á las dos de la tarde del día 6 de abril próximo, señalado en la condicion 13 del pliego que á continuacion se consigna para su mejor inteligencia. Orense 27 de marzo de 1867.

El Gobernador,

Lucas Garcia de Quiñones.

Condiciones bajo las cuales ha de sacarse á pública subasta la conduccion en carruaje del correo de ida y vuelta entre Zamora y Orense.

1.º El contratista se obliga á conducir en carruaje de ida y vuelta, desde Zamora á Orense por Tavera, Villanueva de Valrojo y Mombuey, la correspondencia y periódicos que circulen entre ambos puntos, sin excepcion de ninguna clase.

2.º Dicha correspondencia y periódicos irán á cargo de Conductores del ramo, obligándose el contratista á reservar para estos en sus coches un asiento gratis cubierto, además del almacen para la correspondencia (independiente del de los equipajes) cuyos paquetes podrán tambien ocupar la caja del carruaje si fuese necesario.

3.º La distancia de cincuenta y dos leguas que comprende esta conduccion debe ser recorrida en treinta y cinco horas; y las de entrada y salida en los pueblos del tránsito y extremos, se fijarán en el itinerario que form la Direccion general de Correos, que podrá alterar segun convenga al mejor servicio.

4.º Por los retrasos cuyas causas no se justifiquen debidamente, se exigirá al

contratista en el papel correspondiente la multa de 4 escudos por cada cuarto de hora; y á la tercera falta de esta especie podrá rescindirse el contrato, abonando además dicho contratista los perjuicios que se originen al Estado.

5.º Para el buen desempeño de esta conduccion deberá tener el contratista el número suficiente de caballerías mayores situadas en los puntos mas convenientes de la línea, á juicio de los Administradores principales de Correos de Zamora y Orense.

6.º Será responsable el contratista de la conservacion en buen estado de las maletas en que se conduzca la correspondencia, y de preservar ésta de la humedad y deterioro.

7.º Será obligacion del contratista correr los extraordinarios del servicio que ocurran, cobrando su importe al precio establecido en el reglamento de Postas vigente.

8.º Si por faltar el contratista á cualquiera de las condiciones estipuladas se irrogasen perjuicios á la Administracion, esta, para el resarcimiento, podrá ejercer su accion contra la fianza y bienes de aquel.

9.º La cantidad en que quede rematada la conduccion se satisfará por mensualidades vencidas en las referidas Administraciones principales de Correos de Zamora ó de Orense.

10. El contrato durará cuatro años contados desde el día en que dé principio el servicio, cuyo día se fijará al comunicarse la aprobacion superior de la subasta.

11. Tres meses antes de finalizar dicho plazo, avisará el contratista á la Administracion principal respectiva si se despidie del servicio, á fin de que con oportunidad pueda procederse á nueva subasta; pero si en esta época existiesen causas que impidiesen un nuevo remate, ó hubiere que proceder á un segundo, el contratista tendrá obligacion de continuar por la tácita tres meses más, bajo el mismo precio y condiciones. Si el contratista no se despidiera del servicio, la Administracion podrá subastarlo nuevamente una vez terminado el compromiso, si así lo creyere conveniente, ó hubiera quien lo solicitara. Los tres meses de despedida, cualquiera que sea la época en que se haga, una vez terminado el contrato, empezarán á contarse desde el día en que se reciba la comunicacion.

12. Si durante el tiempo de este contrato fuese necesario variar en parte la línea designada y dirigir la correspondencia por otro ó otros puntos, serán de cuenta del contratista los gastos que esta alteracion ocasiona, sin derecho á indemnizacion alguno; pero si el número de las expediciones se aumentase ó resultare de la variacion aumento ó disminucion de distancias, el Gobierno determinará el abono ó rebaja de la parte correspondiente de la asignacion á prorata. Si la línea se variase del todo el contratista deberá contestar, dentro del término de los quince días siguientes al en que se le dé el aviso, si se aviene ó no á continuar el servicio por la nueva línea que se adopte; en caso de negativa queda al Gobierno el derecho de subastar nuevamente el servicio de que se trata. Si hubiese necesidad de suprimir la línea, el Gobierno avisará al contratista con un mes de anticipacion para que retire el servicio, sin

que tenga éste derecho á indemnizacion.

13. La subasta se anunciará en la Gaceta y Boletines oficiales de las provincias de Zamora y Orense y por los demas medios acostumbrados; y tendrá lugar en Madrid ante el Director general de Correos, y en aquellos puntos ante los Gobernadores asistidos de los Administradores respectivos del ramo el día 6 de abril próximo en el local que señalen dichas autoridades y á la hora de las dos de la tarde.

14. El tipo máximo para el remate será la cantidad de 30.000 escudos anuales, no pudiendo admitirse proposicion que exceda de esta suma.

15. Para presentarse como licitador será condicion precisa depositar previamente en la Caja general de Depósitos, ó en las Tesorerías de Zamora ó Orense, como dependencias de dicha Caja la suma de 3.000 escudos en metálico, ó su equivalente en títulos de la Deuda del Estado, la cual concluido el acto del remate, será devuelta á los interesados, menos la correspondiente al mejor postor, que quedará en depósito para garantia del servicio á que se obliga hasta la conclusion del contrato.

16. Las proposiciones se harán en pliego cerrado, expresándose por letra la cantidad en que el licitador se compromete á prestar el servicio, así como su domicilio y firma, ó la de persona autorizada cuando no sepa escribir. A este pliego se unirá la carta de pago original que acredite haberse hecho el depósito prevenido en la condicion anterior, y una certificacion expedida por el Alcalde del pueblo, residencia del proponente, por la que conste su aptitud legal, buena conducta, y que cuenta con recursos para desempeñar el servicio que licita.

17. Los pliegos con las proposiciones han de quedar precisamente en poder del Presidente de la subasta durante la media hora anterior á la fijada para dar principio al acto, y una vez entregados no podrán retirarse.

18. Para extender las proposiciones se observará la fórmula siguiente:

«Me obligo á desempeñar la conduccion del correo en carruaje desde Zamora á Orense y viceversa, por el precio de... escudos anuales, bajo las condiciones contenidas en el pliego aprobado por S. M.»

Toda proposicion que no se halle redactada en estos términos, ó que contenga modificacion ó cláusulas condicionales, será desechada.

19. Abiertos los pliegos y leídos públicamente, se extenderá el acta del remate, declarándose éste en favor del mejor postor, sin perjuicio de la aprobacion superior, para lo cual se remitirá inmediatamente al expediente al Gobierno.

20. Si de la comparacion de las proposiciones resultasen igualmente beneficiosas dos ó más, se abrirá en el acto nueva licitacion á la voz por espacio de media hora, pero solo entre los autores de las propuestas que hubiesen causado el empate.

21. Hecha la adjudicacion por la Superioridad, se elevará el contrato á escritura pública, siendo de cuenta del rematante los gastos de su otorgamiento y de dos copias simples, y otra en el papel sellado correspondiente para la Direccion general de Correos.

22. Contratado el servicio no se po-

drá subarrendar, ceder ni traspasar sin previo permiso del Gobierno.

23. El rematante quedará sujeto á lo que previene el art. 5.º del Real decreto de 27 de febrero de 1852, si no cumple las condiciones que deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que ésta tenga efecto en el término que se le señale.

24. Cualesquiera que sean los resultados de las proposiciones que se hagan, como igualmente la forma y concepto de la subasta, queda siempre reservada al Ministerio de la Gobernacion la libre facultad de aprobar ó no definitivamente el acto de remate, teniendo siempre en cuenta el mejor servicio público.

Madrid 16 de marzo de 1867.—El Subsecretario, Valero y Soto.

CIRCULAR NÚM. 85.

Seccion de Fomento.

El Sr. Oficial encargado del depósito de caballos sementales del Estado, me participa desde Lugo que habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Director general de Caballería y cria caballar, salgan dichos sementales para las paradas designadas ya en esta provincia, comenzarán á funcionar en ellas desde el 1.º de abril próximo.

Lo que he dispuesto hacer público por medio de este periódico oficial para conocimiento de las personas á quienes interese.

Orense marzo 26 de 1867.

El Gobernador,

Lucas G. de Quiñones.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

D. Benigno Borrajo, juez de primera instancia del partido de Verin en la provincia de Orense.

Hago público que de orden de la Excelentísima Sala de Gobierno de la Audiencia de la Coruña, se anuncia la vacante de una Procura de este juzgado por haber sido nombrado y tomado posesion de una escribanía de actuaciones del mismo D. Gregorio Barreira que la desempeñaba, por término de quince días contados desde el último en que este edicto se publique en los B. Oficiales de las cuatro provincias de Galicia, á fin de que los aspirantes presenten dentro del expresado término sus respectivas solicitudes documentadas conforme al artículo 61 del reglamento de juzgados de 1.º de mayo de 1844 y mas órdenes vigentes, en la secretaria de este juzgado de primera instancia; pues pasado dicho término se hará la correspondiente tercia y remitirá con el expediente á la superioridad.

Dado en Verin á 15 de marzo de 1867.—Benigno Borrajo.—Manuel D. Ferrerós, secretario.

IMPRENTA DE D. FRANCISCO PAZ.